

JUICIOS DE AMPARO

Promovidos ante el Juzgado 1º de Distrito de México por los presbíteros D. Francisco Barragan, D. Luis Mbonaco, D. Amadeo Garibaldi y D. José M. Vilaseca, contra el acuerdo del C. Presidente de la República que los manda expulsar de ella como extranjeros perniciosos.

VARIOS PEDIMENTOS FISCALES.

Primer Pedimento del C. Promotor fiscal.

C. Juez.

El Promotor dice: que el Presbítero D. Francisco Barragan, natural de Nueva Granada, se ha presentado al Juzgado interponiendo recurso de amparo, quejándose de que el 23 del actual se le ha hecho saber, que el C. Presidente de la República lo ha calificado de extranjero pernicioso, y acordado su expulsion del país. Expone, que lleva cosa de veinte años de habitar en la República, y supone que la Orden de expulsion no pudo dictarse por el C. Presidente de la República, ni menos sin juicio previo, designando como garantías violadas en su persona las que concede la Constitución en sus artículos 13, 14 y 21, concluyendo con pedir la suspension del acto reclamado. Como el quejoso tiene intentado otro juicio de amparo contra la providencia del C. Gobernador cuando fué aprehendido por la policía, y el que suscribe promovió tomando en consideracion la Orden de expulsion que ya estaba dada por el C. Presidente y publicada en el Diario Oficial, habiéndola tomado en consideracion en aquel pedimento, lo reproduce.

Las garantías que supone violadas el quejoso en su persona, nunca pueden serlo tratándose del uso de la facultad que concede al C. Presidente de la República el artículo

lo 33 de la Constitución; pues precisamente es el caso en que se suspenden, supuesto que el C. Presidente la ejerce haciendo la calificación por sí, sin la concurrencia de ningún tribunal; ni sustanciando un juicio previo, pues puede ejercitarla en los términos que se lo concede el artículo constitucional citado y la ley de 22 de Febrero de 1832.

La suspension del acto reclamado no puede tener lugar, porque no cabe el amparo; y cuando lo permita la ley es cuando procede el juicio de amparo, esto es, habiendo materia para sustanciarlo, y no puede existir en el caso que nos ocupa, tratándose de un extranjero, como confiesa serlo el quejoso, que en su ocurno dice que es natural de Nueva Granada.

Por lo expuesto, puede el Juzgado declarar que no procede el juicio de amparo ni menos la suspension del acto reclamado.—México, Mayo 31 de 1873.—*Herrera. Campos.*

Segundo Pedimento de C. Promotor fiscal.

C. Juez.

El Promotor dice: que D. José M. Vilaseca, sacerdote católico, se ha presentado al Juzgado interponiendo recurso de amparo, quejándose de que como extranjero pernicioso, se le expulsa del país por el Supremo Gobierno, no siéndolo, designando como garantía violada en su persona la que concede el artículo 20 constitucional. Expone, que hace treinta años que reside en el país; hace una reseña de su conducta durante este periodo, y de que últimamente se ocupaba en el profesorado, teniendo un colegio católico con conocimiento de la autoridad, en que era el único eclesiástico que se encontraba en el establecimiento; entrando al análisis de la manera como á su juicio tiene el Supremo Gobierno por el artículo 33 de

la Constitucion la facultad de expulsar á los extranjeros perniciosos.

Pedido el informe de la ley al C. Gobernador, lo ha evacuado manifestando, que procedió contra el quejoso, porque tuvo noticia de que presidía un noviciado de frailes, precisamente de los suprimidos por las leyes de Reforma; que dada cuenta al Supremo Gobierno, sin determinar conforme á las leyes de Reforma, y no castigando esta infraccion sino usando de las facultades que le da el artículo 33 de la Constitucion, habia acordado la expulsion del quejoso. Sin entrar al exámen de la calificacion de la conducta observada por el Sr. Vilaseca, por ser inconducente en el presente juicio, supuesto que al Juzgado solo toca resolver si el C. Presidente ha obrado conforme á sus facultades constitucionales, es evidente que en el presente caso no hay lugar al amparo.

Los motivos que haya tenido en consideracion el C. Presidente para expulsar al quejoso, ni tiene que someterlos á discucion con el interesado, ni sujetarlos á la calificacion del Juzgado, por que estos actos ni están sujetos á revision, ni es necesario un juicio previo para el ejercicio de esta facultad. Esta es la razon porque el que suscribe ha creído, que escepcionalmente en casos semejantes no cabe el juicio de amparo, cuando el Juzgado tiene noticia por confesion del mismo quejoso, que es extranjero, y que ha sido expulsado por el C. Presidente, usando de la facultad que le concede el artículo 33 de la Constitucion. En estos casos, que objeto podria tener el juicio de amparo. ¿Va á depurarse la conducta del quejoso? ¿Resultando inmaculado en una prueba legal como hombre privado, basta esto para que el juzgado revoque un acto del C. Presidente de la República, ejercido en uso de facultades constitucionales, constituyéndose en revisor de sus actos? ¿En actos de esta naturaleza tiene el C. Presidente de la República que someterse al juicio del Juzgado de Distrito, cuan-

do en la organizacion de los tres poderes no forma parte del poder ejecutivo?

El juzgado comprendiendo sus atribuciones y sin invadir las del Poder Ejecutivo dando lugar á responsabilidades que podrian hacerse efectivas, en amparos interpuestos como el de D. José Miguel Soto Mayor, declaró que no podia entrar al exámen de la conducta del quejoso, y que solo le incumbia juzgar de si el C. Presidente de la República usaba de la facultad que le concede el artículo 33 de la Constitucion con un extranjero.

Por lo expuesto y las razones alegadas en los juicios de amparo promovidos por los demás eclesiásticos extranjeros que han ocurrido al juzgado reclamando contra la providencia de expulsion, puede el juzgado declarar, que la Justicia Federal no ampara ni protege á D. José M. Vilaseca.—Mexico, Junio 17 de 1873.—Herrera Campos.

Tercer Pedimento del C. Promotor fiscal.

C. Juez.

El Promotor dice: que D. Luis Mónaco, natural de Venecia, se ha presentado al Juzgado interponiendo recurso de amparo, quejándose de que se le ha hecho saber, que el C. Presidente de la República lo ha expulsado fuera del pais, usando de la facultad que le concede el artículo 33 de la Constitucion. En el ocurso, el quejoso hace referencia al amparo que intentó contra la prision que le impuso el C. Gobernador, y promovió antes que se le notificara la orden de expulsion acordada por el C. Presidente de la República, concluyendo por pedir la suspension del acto reclamado. Como el que suscribe ha pedido en el anterior amparo sobre lo principal, tomando en consideracion la orden de expulsion que ya habia sido dictada por el C. Presidente de la República, reproduce el anterior pedimento. En cuan-

to al punto de la suspension, esta no puede tener lugar, pues podría tomarse en consideracion la peticion del quejoso, si hubiere mérito para el juicio de amparo, y aun procediera la sustanciacion, que no cabe sobre actos como el reclamado, cuando el Presidente de la República usa de la facultad que le concede el artículo citado, con un extranjero, como confiesa serlo el quejoso. Por lo expuesto puede el Juzgado declarar, que no procede el juicio de amparo en lo principal, ni menos hay mérito para la suspension del acto reclamado.

México, Mayo 31 de 1873. *Herrera Campos.*

Quinto Pedimento del C. Promotor fiscal.

C. Juez.

El Promotor dice: que en el presente juicio de amparo reproduce por vía de alegato el pedimento de fojas 2 y pide al Juzgado que tomándolo en consideracion declare que la Justicia Federal no ampara ni protege al italiano D. Amadeo Garibaldi, México, Julio 19 de 1873.—

Es copia. México, Setiembre 18 de 1873. —*Herrera Campos.*

La sentencia pronunciada por el Juzgado primero de Distrito de México, en los juicios promovidos por varios Presbíteros, corresponde á los anteriores pedimentos.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Agosto 19 de 1873. Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado 1º de Distrito de esta Ciudad por el Presbítero
TOMO IV.—PARTE II.

ro D. Francisco Barragan, contra el acuerdo del C. Presidente de la República que lo mando expulsar de ella como extranjero pernicioso, y con el que estima vulneradas en su persona las garantías otorgadas en los artículos 13, 14, 21, y 23 de la Constitución federal. Visto el alegato presentado en defensa del quejoso, con todas las demás constancias de autos; y

Considerando, en lo que concierne á la calificacion absurda, tiránica y bárbara que se ha hecho de la facultad concedida al gobierno de la República por el artículo 33 de la Constitución federal:

Que semejante opinion puede estimarse aventurada, por obstar en su contra el sentido opuesto de personas muy respetables por su liberalismo, ilustracion y rectitud, entre las que se encuentran las que formaron la mayoría del Congoso constituyente que aprobaron el artículo citado que aun estimando como esacta é incuestionable la mencionada calificacion, ella solamente podría tener cabida, ó cuando se debatió el artículo en el Congreso constituyente, ó cuando volviere á debatirse si llegare á estar á discucion su reforma iniciada ya en el 6º Congreso constitucional, sin que de ninguna manera sea lícito tomarla en cuenta para el presente caso, por ser obligacion estricta de los Tribunales aplicar las leyes vigentes por duras ó absurdas que se las suponga.

Considerando, en cuanto á la investigacion histórica de los países que han concedido á los gobierno la facultad de expulsar á los extranjeros perniciosos:

Que si se debiera entrar al examen de este punto, podría citarse la legislacion de muchos pueblos en que se ha establecido dicha atribucion; pero que tal argumento es tan inconducente como el anterior, por que aun en el supuesto de que el gobierno de la República Mexicana fuese el único en el mundo á quien se hubiere dado la referida facultad de expulsion, no por eso dejaría de ser obligatorio para los tribunales de México aplicar ésta prevencion, puesto que deban juz-

gar, no por lo establecido en otras partes, sino por lo prescrito en la Constitución de su país, aun cuando fuere singular y anómalo.

Considerando, en lo relativo á lo que deba entenderse por la palabra "Gobierno," empleada en el artículo 33 de la Constitución federal.

Que si bien en el riguroso tecnicismo constitucional, por gobierno se entiende el conjunto de los tres poderes supremos; en el uso comun de hablar, así como aun en el oficial y parlamentario, se da aunque impropriamente el nombre de gobierno al ejecutivo de la union: para producir el convencimiento de que por gobierno entiende el artículo 33 de la Constitución al Presidente de la República, abundan comprobantes de todo genero; que tal es la inteligencia expresada por los autores de la Constitución de 1857; que la misma es la que le dan los comentadores del texto constitucional.

Que siendo varios los casos en que los Presidentes de la República han usado de la facultad de expulsion, no puede explicarse satisfactoriamente que nunca haya habido un diputado que levante la voz en Congreso alguno para reclamar ó protestar contra un acto con el que deberian estimarse invadidas las atribuciones del cuerpo legislativo, demostrando en conciencia ese silencio que no ha habido semejante invasion; que la Suprema Corte de Justicia á su vez, no ya de una manera tácita sino expresa y terminantemente, ha sancionado con diversas ejecutorias el reconocimiento de la facultad de expulsion ejercida por los Presidentes de la República, lo que de seguro no habría hecho la misma Corte si hubiese estimado usurpadas sus facultades.

Que á nadie hasta ahora se le había ocurrido poner en duda esa facultad, ejercida constantemente á ciencia y paciencia de toda la Nacion, por el Presidente de la República.

Que no se concibe de una manera racional y satisfactoria como pudiera tener lugar para los casos de expulsion, el ayuntamien-

to de los tres Poderes Supremos, Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Que segun lo demuestra la historia, en cuantos países se ha ejercitado la facultad de expulsion lo ha sido siempre sin escepcion alguna, por la autoridad encargada del Poder Ejecutivo; y que como la razon lo demuestra á su vez, á esa autoridad es á la única á quien puede corresponder, por tratarse de una facultad de seguridad pública y de alta policia, procedente de los datos especiales en que se funda.

Considerando, en lo concerniente á las circunstancias que deben concurrir para que se ejerza la facultad de expulsion:

Que entre las dos consignadas en el artículo 33 de la Constitución Federal, hay una marcada diferencia, pues mientras la del extranjero se refiere á un hecho que admite plena prueba, la de pernicioso atañe á una apreciacion moral, fundada en datos públicos ó reservados.

Que, en virtud de esa diferencia tan esencial, no es aplicable á una de esas circunstancias lo que sí lo es á la otra.

Que por lo mismo, si el Presidente de la República llegara alguna vez, lo que no es presumible á no ser por equivocacion, á querer expulsar á un mexicano, cabría indudablemente el amparo, porque ya entonces no se obraría con arreglo á la facultad concedida en el artículo 33, sino por el contrario, violándola con una ampliacion indebida, susceptible de prueba intachable, mientras que el amparo no puede tener cabida respecto de la apreciacion moral de ser pernicioso un extranjero, tanto por dejar el artículo 33 esta calificacion al Presidente, puesto que á él es á quien dá la facultad de expulsion, cuanto por no ser posible que los tribunales fallen ó decidan sobre apreciaciones morales.

Que pernicioso, segun el Diccionario de la lengua castellana, es el gravemente dañoso y perjudicial, y con arreglo á esta definicion, la palabra «pernicioso» es mucho mas lata que la palabra «delincuente», pudiendo decirse que la primera viene á ser como el gé-

nero, y la segunda como la especie; y si bien los tribunales pudieran fallar sobre la conducta del dañoso y perjudicial, acusado de algun delito, jamás podrian hacerlo sobre la conducta de quien sin estar acusado de delito alguno, fuese sin embargo perjudicial y dañoso.

Que al usar el artículo 33 de la palabra mas amplia y genérica que es la de «pernicioso», y al dejar *salva en todo caso* la facultad de expulsion, ha querido evidentemente que el Presidente quedo expedito para expulsar al extranjero que estime pernicioso; y que si hubiera de admitirse el absurdo de que se reservase á los tribunales la calificación de lo pernicioso, sucedería por necesidad, ó que el fallo fuese absolutorio, y entonces ya la expulsion no sería posible, ó que el fallo fuese condenatorio, y entonces ya la expulsion sería obligatoria; resultando en uno y otro caso enteramente negatoria la facultad concedida al Presidente en el artículo 33, á lo cual hay que agregar todavía, que las demoras y dilaciones inevitables en todo juicio, podrian hasta poner alguna vez en peligro el orden público, la paz nacional, la seguridad del país, cuando se tratara de expulsiones que debieran ser violentas ó inmediatas.

Considerando, por lo que toca al carácter de la facultad consignada en el artículo 33:

Que es en efecto posible ejercerla de una manera arbitraria y abusiva por ser ilimitada; pero que sin embargo, la experiencia ha acreditado hasta aquí la parsimonia con que la han empleado los Presidentes de la República; y que sobre todo, aun el caso del abuso podía haber sido motivo para restringir la facultad, sin que por eso lo sea para no respetarla, cuando no quiso admitir restricciones el artículo 33, obligatorio en los términos amplísimos en que está concebido.

Considerando, en lo que atañe á los artículos del 190 al 192 del Código penal vigente:

Que por los términos bien sabidos en que fué expedido dicho Código, por ningún motivo pueden ni deben estimarse los artí-

culos citados como ley orgánica del artículo 33 de la Constitución.

Que las disposiciones contenidas en ellos, pueden conciliarse con las del artículo constitucional, en el sentido de que los primeros hablan de los casos en que los extranjeros sean juzgados sin anuencia y hasta sin conocimiento del Presidente de la República, á quien se da el correspondiente aviso después de la imposición de la pena; y que de no admitirse esta explicación, sino la de que hay un conflicto patente é inconciliable entre los artículos del 190 al 192 del Código penal y el 33 de la Constitución, por haber venido aquellos á restringir la facultad de expulsion que este otorga en todo caso, cuando se trata de extranjeros perniciosos, entra entonces de lleno la prevención de que los preceptos de la misma Constitución deben siempre anteponerse y preferirse á los de las leyes secundarias, incluidas aun las orgánicas, desapareciendo en tal virtud los artículos del Código penal ante los del fundamental de la Nación.

Considerando, en lo relativo al artículo 23 de la ley de 12 de Julio de 1859:

Que este artículo no habla de los extranjeros, sino de todos los que directa ó indirectamente se opongan ó de cualquiera manera enervén el cumplimiento de lo mandado en la ley citada.

Que el mismo artículo dejó al arbitrio de Gobierno la expulsion fuera de la República ó la consignación á la autoridad judicial.

Que no hay en consecuencia, conflicto alguno entre el repetido artículo y el 33 de la Constitución, y que si tal conflicto hubiera, debería siempre prevalecer el artículo constitucional.

Considerando en lo concerniente al artículo 23 de la ley de 4 de Setiembre de 1860:

Que las prevenciones de ese artículo se refieren á consignar la pena que debe imponerse al Ministro de un culto, que en el ejercicio de sus funciones ordene la ejecución de un delito ó exhorte á cometerlo, sin que tales disposiciones coarten en lo mas míni-

mo la amplia facultad de expulsion que el artículo 33 de nuestro Código político otorga al Presidente de la República.

Considerando, en lo que respecta á la sentencia del Juez primero de Distrito de esta ciudad.

Que deduciéndose de las observaciones concernientes al punto sobre la inteligencia que debe darse al artículo 33 de la Constitucion, la legítima consecuencia de que por él se faculta al presidente de la República para expulsar en todo caso al extranjero que estime pernicioso; la mencionada sentencia que concedió amparo contra el acuerdo de 23 de Mayo último, en que se mandó expulsar al quejoso, ha sido pronunciada contra ley expresa, con la circunstancia agravante de ser esa ley la primera y mas respetable de todas, la Constitucion del país.

Por tales consideraciones y fundamentos, se decreta.

Primero: Que se revoca la sentencia pronunciada en 26 de Julio próximo pasado por el Juez primero de Distrito de esta ciudad, concediendo amparo al quejoso contra el acuerdo del presidente de la República, de 23 de Mayo último, en que lo mandó expulsar.

Segundo: Que la Justicia de la Union no ampara ni protege á D. Francisco Barragan contra el mencionado acuerdo.

Tercero: Que se saque testimonio de lo conducente y se remita al Tribunal de Circuito para los efectos de la responsabilidad á que se refiere la parte relativa del artículo 15 de la ley de 20 de Enero de 1869.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por todos los votos menos uno respecto de los dos primeros puntos, y por mayoría respecto del tercero, lo decretaron los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Me-

xicanos, y firmaron.—José María Iglesias.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José María Lozano.—José Arteaga.—Pedro Ordaz.—Ignacio Ramirez.—M. de Castañeda y Nájera.—José María del Castillo Velasco.—M. Auza.—Simón Guzman.—Luis Velasquez.—José García Ramirez.—Ignacio M. Altamirano.—Leon Guzman.—Luis Maria Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México, Setiembre 18 de 1873.—Luis M. Aguilar, secretario.

Esta ejecutoria corresponde tambien á los anteriores juicios.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Durango, por Julian Chavarría por sí y en representacion de varios comerciantes, contra la providencia del C. Gefe político del partido del Centro de Durango por la que fueron lanzados fuera del Parían.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito: varios comerciantes del Mercado público de esta ciudad, han solicitado amparo contra la providencia del Gefe político del Partido, que dictó para hacer cumplir los bandos de policía en el Parían. Esa providencia, por lo que aparece en el expediente, se contrae á que las verduleras que estorban el tránsito de las calles y cruceros se trasladaran al local destinado al nuevo Parían; y como el cumplimiento de los bandos de policía, entre los cuales está la disposicion para que no obstruyan con puestos y vendimias, es de la intervencion de la autoridad política, y las calles y cruceros del Mercado, aunque el Ayuntamiento pague el arrendamiento de